

Medios en transición



CÉSAR CANSINO

Ha resurgido con nueva fuerza el tema del papel que deben cumplir los medios de comunicación en un país que como México busca un lugar entre las naciones sustentadas en usos y prácticas democráticos. En particular, se plantea la disyuntiva de si el Estado debe reglamentar la libertad de expresión o son los propios medios los que deben desempeñarse sin controles y a partir de un código de ética fijado por ellos mismos.

El tema admite múltiples respuestas y cualquier decisión al respecto debe ser producto de una larga discusión. Más aún, sería ingenuo ver en la posición de las autoridades sobre este asunto un discurso desinteresado. Por el contrario, proponer que sean los propios medios los que ejerzan su derecho a la libertad de expresión sin mediaciones políticas resulta en este momento más una estrategia política que un rasgo auténtico de voluntad democrática de las autoridades. En efecto, como han sostenido algunos legisladores, lo que en realidad se quiere es que no se reglamente sobre los medios para que el gobierno pueda seguir controlándolos como lo ha hecho hasta ahora.

Independientemente de estos entretelones, la discusión de esta y otras opciones debe comenzar por identificar el papel que los medios cumplen y pueden cumplir dependiendo de las características del ordenamiento institucional en el que se desenvuelven. A este tema dirijo precisamente las reflexiones que siguen.

La politización de los medios

Prácticamente todos los estudiosos de los medios masivos de comunicación masiva han advertido la estrecha rela-

ción que existe entre éstos y los ámbitos político y sociocultural en las sociedades modernas. Así, por ejemplo, existe consenso en que los medios cumplen un papel protagónico en los procesos de socialización política y de formación de la opinión pública. Sin embargo, existen aún muchos aspectos que ameritan un tratamiento especializado o que requieren de mayor profundización. Uno de estos temas consiste en determinar el papel específico que desempeñan los medios de comunicación dependiendo de las características del ordenamiento político-institucional en el que se desenvuelven.

Por lo que respecta a los regímenes democráticos, cabe esperar que los medios de comunicación dispongan aquí de una fuerte autonomía con respecto a lo político, es decir, la actividad de la comunicación no está sujeta a rígidos controles políticos, sino que refleja la pluralidad ideológica y política de la sociedad en cuestión. En ese sentido, en los regímenes democráticos, es muy común que los medios no sólo tengan una fuerte penetración o influencia en los patrones sociales de comportamiento, sino que también influyan en el ámbito político; es decir, son un efectivo instrumento de socialización, pero también pueden afectar el desempeño de las autoridades y demás actores políticos. Existen muchos ejemplos donde la intervención de los medios ha sido decisiva en la debacle de un gobierno o en la modificación o virtual abandono de alguna de sus políticas. Piénsese si no en Watergate o en la Guerra de Vietnam, por citar dos ejemplos muy conocidos y estudiados.

En los regímenes no democráticos, por su parte, sucede exactamente lo contrario. En estos casos, los medios se convierten en un instrumento estratégico de control para las es-

estructuras políticas. De la adecuada manipulación y control de la información depende muchas veces la continuidad de estos ordenamientos institucionales. También en este contexto existen muchos ejemplos donde la manipulación de los medios sólo se descubre una vez que ha colapsado la dictadura. Piénsese, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, donde la Junta Militar difundió, gracias a su control sobre los medios, la versión de que las fuerzas armadas argentinas iban ganando la guerra, cuando en realidad no tenían ninguna posibilidad frente a la armada británica.

La despolitización de la sociedad

Existe pues una estrecha relación entre democracia y el papel de los medios, entendiendo a éste como la capacidad de informar objetivamente a la sociedad y, en ese sentido, de contribuir a la conformación de una opinión pública interesada y en alguna medida involucrada en el acontecer nacional. Pero el grado de democratización del régimen influye también en la credibilidad social de los medios; es decir, cuando la información está controlada políticamente, disminuye sensiblemente la credibilidad de los medios. En estas circunstancias se genera una suerte de círculo vicioso: el control de los medios genera incredulidad, la incredulidad genera desinformación, y la desinformación (léase despolitización) es la condición básica para el control autoritario.

Pero la despolitización de la sociedad no es un fenómeno privativo de regímenes no democráticos.

De hecho, en la actua-

lidad presenciarnos una separación cada vez mayor entre lo público y lo privado, independientemente de las características políticas dominantes. En efecto, la política se ha vuelto cada vez más una actividad de especialistas, por lo que los ciudadanos en general se involucran cada vez menos en ella. La toma de decisiones es competencia de una elite que dispone de los conocimientos técnicos necesarios para cumplir tal función, y aquí los ciudadanos en general tienen muy poco que aportar. Tal pareciera que en las sociedades democráticas modernas, la democracia empieza y termina con el sufragio, es decir, con la elección de los representantes políticos. Después de ello corresponde a las autoridades tomar las decisiones que atañen a la sociedad.

Existen muchas teorías que explican esta tendencia a la despolitización de las sociedades modernas, desde las que consideran que la complejidad de los sistemas elimina a los individuos, hasta las interpretaciones culturalistas o de fin de época que explican la despolitización en términos de un creciente desencanto provocado por los proyectos globalizadores unitarios. Independientemente de ello, es claro que los medios tienen mucho que ver en esta tendencia. En efecto, si consideramos que los medios están insertos en una lógica de mercado, es decir, buscan obtener la mayor audiencia posible frente a sus competidores, destinarán muy poco espacio a los asuntos políticos en la medida en que éstos interesan cada vez menos a los espectadores. Éste es el caso sobre todo de los medios electrónicos, cuyo consumo masivo es infinitamente superior al de los medios impresos.

Esta tendencia se observa sobre todo en los regímenes democráticos consolidados. En estos casos, la política también funciona con la lógica del mercado, de tal suerte que los partidos intercambian política a cambio de votos. Así, no se espera que los ciudadanos se involucren en política, sino que solamente emitan su voto. Por su parte, los ciudadanos no invertirán más que el tiempo mínimo necesario para emitir su preferencia, pues no están dispuestos a sacrificar mucho tiempo para formarse una opinión razonada y precisa de los contendientes. De aquí que la política moderna concentre buena parte de su atención en los mecanismos de propaganda política y de persuasión más que de información. Y es claro que en esta tendencia mucho tienen que aportar los medios, entendidos como los





instrumentos más eficaces de persuasión, con la misma lógica con que se venden otros productos de consumo.

En consecuencia, la despolitización es controlada o inducida en mayor o menor medida tanto en los regímenes democráticos como en los regímenes no democráticos. Se podría decir que se trata en ambos casos de una despolitización funcional a los intereses de la clase política. Sin embargo, es posible advertir cambios en el grado de involucramiento político de los ciudadanos en ciertos contextos o estadios de evolución política. Básicamente, me refiero aquí a procesos de transición democrática que necesariamente implican modificaciones en las preferencias y en la actividad política de los ciudadanos. En estas situaciones, los medios también tenderán a modificarse no sólo por que se flexibilizan los controles tradicionales que la dominación autoritaria imponía previamente, sino también porque los medios empiezan a funcionar cada vez más con la lógica del mercado descrita antes. Un creciente o repentino interés político por parte de la sociedad no puede ser subestimado por los medios interesados siempre en capturar la mayor audiencia posible. Con ello podemos comenzar a distinguir la específica relación que se establece entre medios y regímenes políticos en transición o en proceso de democratización.

De la lógica de los controles a la lógica del mercado

Una revisión somera de distintos procesos de transición democrática ocurridos en América Latina, en Europa del Sur o en Europa del Este muestra efectivamente que los medios pueden llegar a ser cruciales en este tipo de procesos. En muchos casos, cuando los militares en el poder comienzan a perder el apoyo de actores políticamente relevantes y, en consecuencia, a perder el control sobre los aparatos del Estado, los medios relajan sus controles internos y muchos de ellos —sobre todo los medios escritos— empiezan a constituirse en el canal de expresión natural de los grupos disidentes. Entre otros factores, esta mutación en el carácter de los medios depende del deterioro político del régimen y del grado existente de movilidad política, es decir, de la transferencia de recursos y actores antes identificados con el régimen hacia la oposición activa. De hecho, en todo pacto democrático, los primeros espacios liberados de la tutela o del control estatal son las organizaciones partidistas y los medios de comunicación. Posteriormente, los tiempos y el éxito de la transición dependen en buena medida de la actuación responsable y comprometida de ambos. Aquí, los medios sólo podrán ganar credibilidad y, en consecuencia, audiencia o lectores, si son capaces de reflejar la pluralidad de intereses y opciones que la apertura posibilita.

Sin embargo, determinar el papel que los medios de comunicación desempeñan en regímenes en transición o establecer el tipo de modificaciones que introducen en el manejo de la información no es una tarea sencilla. Ello se debe en buena medida a la naturaleza ambigua e inestable de estos regímenes, por lo que bien pueden ser definidos como *híbridos institucionales*.

Este tipo de regímenes, entre los cuales debe ubicarse claramente el mexicano, son precedidos de una experiencia autoritaria que ha iniciado una apertura, liberalización o parcial ruptura de las limitaciones al pluralismo. Ello implica que, a un lado de los viejos actores del régimen autoritario precedente, pertenecientes a una coalición ahora ya no dominante o al menos no cohesionada, han emergido con claridad oposiciones, gracias también a un parcial y relativo respeto por los derechos civiles. Tales oposiciones son admitidas a participar en el proceso político, pero en condiciones no plenamente equitativas o regulares. Por otra parte, exis-

te una participación real pero reducida, no sólo en periodos electorales. Una ley electoral deficiente y distorsionante contribuye a mantener una ventaja relativa del partido del gobierno —por lo general una estructura burocrático-clientelista— en la distribución de las curules. Esto implica también que están ausentes prácticamente todas las justificaciones del régimen basadas solamente sobre valores omnicomprendidos y ambiguos. Las formas de represión policiaca también se encubren o debilitan. En términos de estructuras políticas, el régimen vive un proceso de desinstitucionalización y redefinición políticas. Este tipo de regímenes tiene su origen en la tentativa —por parte de las facciones moderadas del régimen autoritario— de resistir a las presiones internas y externas ejercidas sobre la coalición dominante, de continuar manteniendo el orden y los arreglos distributivos previos, de satisfacer parcialmente —o al menos aparentar satisfacer— la demanda de transformación en sentido democrático deseada por los otros actores.

Considerando estas características de los regímenes en transición, puede concluirse que la relación entre el Estado y los medios ya no puede basarse en el pleno control de éstos, pero los medios tampoco pueden ser dejados en absoluta libertad. Más específicamente, se consiente alguna libertad de los medios, siempre y cuando éstos no superen un umbral crítico que ponga en peligro el protagonismo de los actores identificados con el régimen de partido o que complique el proceso de transición.

Naturalmente, hay que hacer aquí una distinción entre los medios electrónicos, como la televisión y la radio, y los medios escritos, básicamente periódicos y revistas. En el caso de los primeros, por su carácter masivo y su mayor penetración social, es más probable que los controles sean más rígidos. En el caso de la prensa, que obviamente es consumida por una proporción mucho menor de la población, hay una mayor flexibilidad para su libre expresión. Pero aun aquí es factible que se mantengan ciertas prácticas de censura y en ocasiones también de autocensura, pues con frecuencia los periodistas se autolimitan por considerar que no es prudente traspasar ciertas fronteras en su actividad informativa.

Sin embargo, lo más probable es que la actividad de los medios durante una transición muestre cambios sustanciales con respecto a la situación autoritaria precedente. Ubicados entre la lógica de los controles que no termina por desaparecer y la lógica del mercado que comienza a afirmarse, los medios tienden a ser más críticos y plurales. Incluso los medios electrónicos comienzan a romper

en alguna proporción el cerco que los mantenía maniatados en el pasado.

Obviamente, la magnitud de estos cambios mantiene una relación directa ya sea con el grado de deterioro político del régimen o con el grado de apertura política que el proceso de transición permite. Así, si el grado de apertura es alto, es más probable que los medios alcancen mayor credibilidad y que, por extensión, contribuyan a la politización de sus respectivas sociedades.

Ahora bien, si en el espacio de apertura que la transición permite los medios adoptan una actitud crítica y plural, entonces tendrán un mayor impacto en la opinión pública y hasta podrán incrementar su potencial para influir en el rumbo de la transición democrática. En todo caso, se trataría de una influencia indirecta, pues la apertura de los medios no incide directamente en las estructuras políticas, sino en la cultura política de la sociedad en la que se desenvuelven. Ello no es en absoluto desdeñable, pues a través de los medios la política se vuelve un asunto de interés nacional y los políticos se humanizan a los ojos de la opinión pública, ya que salen a relucir sus defectos y virtudes. Y, más importante aún, empieza a ganar terreno la idea de que un cambio de poder no sería una catástrofe ni algo imposible de realizar por la vía pacífica.

México como caso de estudio

Tradicionalmente, los medios de comunicación en México, y sobre todo los medios electrónicos, han funcionado según una lógica de control propia de los regímenes no democráticos. En efecto, durante décadas, el Estado mexicano concibió a los medios de manera instrumental. La adecuada manipulación y control de la información era un mecanismo estratégico para un régimen que no admitía el disenso ni la oposición. En la actualidad, al igual que las instituciones y las reglas del juego políticos, los medios están en transición, lo cual significa básicamente que han alcanzado mayor independencia respecto del Estado, son más plurales y en algunos casos hasta críticos.

Sin embargo, no puede decirse que los medios en general hayan abandonado por completo la lógica de control y manipulación que predominaba en el pasado. Así, por ejemplo, los medios electrónicos, y en particular la televisión de cobertura nacional, muestran grandes rezagos, sobre todo si se contrastan con los medios escritos. En ocasiones, el manejo de la información que hacen algunos noticiarios de la tele-

visión comercial es tan tendencioso y parcial que nos hace dudar de su pretendida neutralidad y autonomía respecto del Estado.

Ciertamente, por necesidad, los medios son más cuidadosos que en el pasado. Ser estigmatizados como oficialistas, parciales y poco objetivos les traería enormes perjuicios, pues hoy la sociedad es más plural y demanda que los medios reflejen esa pluralidad. La imagen que proyecta un medio es entonces importante para mantener e incrementar su audiencia y ser competitivo. Pero esta necesidad del mercado no ha impedido que algunos medios hagan su propio juego político, es decir, que tomen partido por el gobierno, lo cual, por obvias razones, es más evidente en tiempos electorales. En todo caso, lo que ha cambiado son las formas en que los medios juegan políticamente. Si la sociedad demanda neutralidad e imparcialidad, la manipulación de la información tiene que ser lo suficientemente sutil y encubierta—los especialistas dirían subliminal— para no despertar suspicacias al tiempo que sea efectiva.

En síntesis, en un país en transición los medios también tenderán a modificarse no sólo por que se flexibilizan los controles tradicionales que la dominación autoritaria imponía previamente, sino también porque empiezan a funcionar cada vez más con una lógica de mercado. Un creciente interés político por parte de la sociedad no puede ser subestimado por los medios preocupa-

dos siempre en capturar la mayor audiencia posible. Sin embargo, eso no significa que los medios en general asuman el compromiso de informar objetivamente a la sociedad y, en ese sentido, de contribuir a la conformación de una opinión pública interesada y cada vez más involucrada en el acontecer nacional. Por el contrario, para algunos medios sigue siendo prioritario moldear la opinión pública de acuerdo con las propias preferencias de los dueños del medio en cuestión. El desafío de estos medios está entonces en no arriesgar su credibilidad sin renunciar a su propio juego político.

Póngase como ejemplo el tratamiento que los medios han dado al conflicto de Chiapas. Por su enorme carga desestabilizadora, este conflicto fue desde su estallamiento en 1994 un tema sumamente delicado para los medios en general. En el caso de la televisión nacional ha prevalecido desde entonces la tendencia a minimizar el conflicto o a satanizar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Existen muchos ejemplos de este proceder, pero basta recordar el apoyo que de manera velada o abierta manifestaron las principales cadenas televisivas cuando el gobierno de Zedillo giró órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN y tomó acciones para cercar a los zapatistas. En este caso concreto, los medios electrónicos han mostrado por lo general una actitud sumamente tenden-

ciosa, lo cual ha puesto en evidencia que siguen funcionando en coyunturas críticas con una lógica de control y de manipulación.

En ocasiones, pareciera que los medios televisivos siguen funcionando con el supuesto de que la sociedad mexicana puede moldearse y manipularse fácilmente, como si en este país no se hubieran modificado nuestras percepciones políticas, sobre todo después de los muchos acontecimientos criminales, impunes y corruptos de los tiempos más recientes. En ese sentido, la redefinición del papel de los medios de comunicación es una cuestión ineludible en un país donde la cultura política de las mayorías ha evolucionado mucho más rápidamente que las propias instituciones y prácticas políticas. ♦

